

Actitudes hacia el Fondo de Recuperación Europeo: España frente a los Países Bajos

Monika Sie Dhian Ho, directora general del Instituto Clingendael en la Haya, y Charles Powell, director del Real Instituto Elcano en Madrid

Este comentario ha sido coescrito por Rem Korteweg, investigador senior en el Instituto Clingendael y Federico Steinberg y Miguel Otero-Iglesias, investigadores principales en el Real Instituto Elcano

Los Países Bajos y España se sitúan en los extremos opuestos del debate en torno al paquete de recuperación de la UE, pero deben darse cuenta de que navegan en el mismo barco.

La pandemia del COVID-19 ha desencadenado una recesión sin precedentes en Europa en un momento particularmente delicado para la UE. Podría tratarse de la prueba más difícil para la integración europea hasta la fecha. Una respuesta contundente, rápida y coordinada es esencial.

En marzo, la actuación inicial de la UE fue descoordinada. Varias instituciones europeas han adoptado pasos rápidos y atrevidos desde entonces. El Banco Central Europeo (BCE) ha puesto en marcha un programa de compra de activos nunca antes visto; la Comisión Europea, por primera vez en la historia, ha relajado las restricciones sobre la expansión fiscal y la ayuda estatal; y el Eurogrupo ha acordado nuevas líneas de crédito en el marco del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE), medidas de emergencia que apoyen a la población desempleada y nuevos fondos para el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Ahora es el turno para los Jefes de Estado y de Gobierno de estar a la altura del desafío.

Una pronta recuperación económica contribuiría a evitar una crisis social, económica y política prolongada en el tiempo. Además, la crisis es una oportunidad para reconducir la economía europea de cara a los retos digitales y verdes del siglo XXI. También se trata de una prueba para la solidaridad dentro de la UE. Ante un mundo cada vez más definido por la competición geopolítica y económica entre EEUU y China, ningún Estado europeo puede permitirse actuar por su cuenta. El complejo panorama geopolítico de la actualidad hace que una Europa unida sea aún más necesaria.

La crisis en curso es como un meteorito cayendo estrepitosamente desde el cielo. Asumir la culpa no le corresponde a ningún gobierno de la UE y afrontar las consecuencias exige cooperación. El mercado interno, la unión monetaria y el espacio Schengen están en peligro, mientras que voces populistas y antieuropeístas se muestran prestas a explotar los desacuerdos que han surgido entre Estados miembros.

Una de las cuestiones pendientes sería el llamado Fondo de Recuperación Europeo. Se basa en una propuesta de la Comisión y está integrado en el borrador del presupuesto de la UE para los próximos siete años. Éste facilitaría inversiones en la UE por valor de casi 2 billones de euros, tomando una parte la forma de deuda emitida por la Comisión. Cuanto antes se alcance un acuerdo, antes podrán desbloquearse los fondos y más rápida será la recuperación. La celebración de próximas elecciones en lugares como los Países Bajos – donde el gobierno cuenta con una escueta mayoría – implica igualmente que, cuanto más

se tarde en lograr un compromiso, más tiempo pasarán sus parlamentarios pensando en las elecciones, lo que a su vez dificultaría más el cierre del acuerdo. Existe una oportunidad para alcanzar dicho acuerdo en este mes de julio.

Los Países Bajos y España piensan de forma diferente en relación a varios elementos del paquete de recuperación. La preocupación neerlandesa por introducir una cierta condicionalidad es de sobra conocida, como también lo es el hecho de que el país es uno de los mayores beneficiarios de un mercado único fuerte. Por su parte, España sabe que exigir un cheque en blanco costado por el Norte es una postura indefendible en términos políticos y morales, de manera que cualquier acuerdo deberá sellar un equilibrio entre financiación y condiciones; entre reforma y solidaridad.

Ambos Estados miembros coinciden en este último punto, del mismo modo que lo hacen en cuanto a la necesidad de una recuperación digital, inclusiva y verde. Con un diseño apropiado, el Plan de Recuperación podría asistir en la creación de una Europa más geopolítica e incrementar la autonomía estratégica de Europa a través de invertir en nuevas tecnologías, fortalecer el papel internacional del euro, y reducir dependencias sin caer en las trampas del proteccionismo.

Para conseguir estos objetivos, el Plan de Recuperación ha de ser lo suficientemente robusto como para garantizar que la recuperación no agrava la divergencia económica dentro de la Unión. Las amplias diferencias entre los Estados miembros en las cantidades de ayuda pública ofrecida encierran el riesgo de desnivelar el marco de igualdad en el seno de la UE. Una parte importante del Plan debería, por consiguiente, venir en forma de subsidios. Asimismo, este grado de solidaridad es necesario si se quieren evitar incrementos perniciosos de la deuda pública de los Estados miembros, los cuales podrían derivar en una nueva crisis de la eurozona. Como contrapunto, hay un amplio consenso en torno a la incorporación en el plan de un mecanismo de monitoreo adecuado a nivel europeo, y así estar seguros de que los fondos son empleados de forma apropiada y se salvaguarda una suficiente rendición de cuentas.

Hablar de solidaridad también supone reconocer que cada país debe llevar a cabo procesos de reforma. Las recomendaciones específicas por país que la Comisión Europea publica en sus informes por semestre europeo son un buen punto de partida. En el caso de España, una convergencia generalizada de opiniones subraya la necesidad de reformar el sistema educativo, el mercado laboral, el marco fiscal, la administración pública y la política social. Los españoles conocen el carácter pertinente de estas reformas, tal y como eran conscientes de la necesidad de una transformación estructural de la economía cuando el país pasó a formar parte de la UE hace más de 30 años. Los Países Bajos también tienen reformas pendientes: las deficiencias que posibilitan la evasión fiscal corporativa han de corregirse; los trabajadores autónomos deben gozar de mayor protección; y hay que abordar el elevado superávit de la balanza por cuenta corriente.

A raíz de las crisis anteriores, los europeos han aprendido por la vía dura que la apropiación doméstica de las reformas nacionales es crucial a la hora de incentivar su éxito a largo plazo. En cambio, cuando las normas son percibidas como impuestas desde el exterior, pueden despertar el sentimiento antieuropeísta. Así, dotar de capacidad de

veto sobre el gasto de los fondos de recuperación a terceros gobiernos o parlamentos sería una receta para la acritud y el fracaso. Al contrario, la Comisión Europea, dado su profundo conocimiento técnico de las economías de los Estados miembros, es la institución más idónea para monitorizar la implementación de reformas, si bien su capacidad para desempeñar esta tarea y su papel de asegurar el cumplimiento deberían ser objeto de mejora.

El Parlamento Europeo es otra institución comunitaria que debería ejercer un papel concreto. La emisión de deuda conjunta requiere de un control democrático compartido sobre cómo la deuda es empleada y reembolsada. Desde luego, los parlamentos nacionales juegan un papel en el escrutinio de los diferentes planes, pero ello no debería restar importancia al cometido del Parlamento Europeo. Éste debería poder ser partícipe de la supervisión tanto de las líneas generales del plan como del monitoreo del buen uso de los fondos.

España y los Países Bajos –cuarta y quinta economías de la UE, respectivamente– tienen, en última instancia, una responsabilidad compartida de conseguir que esto funcione.